



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA  
ACCIONANTE: JORGE IVAN TORO LOPEZ  
ACCIONADO: COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ  
PICALAÑA  
VINCULADO: JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
DE MEDELLÍN y otros  
RADICADO: 050883105001202300020 01  
ACTA N° 015

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procedería a resolver la impugnación formulada por el accionante contra de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero (1) Laboral del Circuito de Bello, si no es porque se ha advertido una causal de nulidad en el trámite de la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 015** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

#### 1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- **La acción de tutela**

El señor JORGE IVAN TORO LOPEZ interpuso la presente acción de tutela en contra de COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALAÑA invocando la protección constitucional de diversos derechos fundamentales, manifestando que supera el factor objetivo y/o subjetivo para ser merecedor del goce del mecanismo sustitutivo de libertad condicional sujeto a la respectiva redención de pena de certificados de cómputos por estímulos de estudio académico realizado de manera sobresaliente de tiempo comprendido entre julio a diciembre de 2019 en dicha actividad. Requiere con carácter urgente de dichos certificados de

cómputos con su correspondiente calificación de conducta y/o actividad con el ánimo de complementar dicho requisito.

- **El trámite procesal**

Mediante auto del 24 de enero de 2023, se avocó conocimiento contra de COIBA – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA<sup>1</sup>. Surgió la necesidad de vincular al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO “CARCEL BELLAVISTA”, JUZGADO 5° y 7° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN y el JUZGADO 4° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUÉ TOLIMA<sup>2</sup>.

Ahora, debe resaltarse que el INPEC en el informe rendido en primera instancia<sup>3</sup> expone que el competente para atender la petición del accionante es COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA.

*“La Dirección General del INPEC No ha violado los derechos fundamentales del señor JORGE IVAN TORO LOPEZ, por no dar respuesta a su requerimiento y lo relacionado a la clasificación en fase. **El competente de dar respuesta y realizar la clasificación en fase es el COIBA - PICALÉÑA a través de su equipo de trabajo toda vez que en este Centro Carcelario es donde reposa la información y se puede verificar lo manifestado por el accionante.***

*“En cuanto a la educación, el artículo 97 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 60 de la Ley 1709 de 2014, dispone la redención de penas por estudio que para cualquier caso corresponderá a la condonación de un día de pena por dos días de estudio, para lo cual los Establecimiento Penitenciarios deberán certificar en tiempo dichas actividades, en los mismos términos que para el trabajo penitenciario. Cabe resaltar, que el artículo 103 A de la Ley 1709 de 2004, determinó que la redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella, a su vez determinó que todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. En suma, cuando el interno haya desarrollado una actividad de estudio, trabajo o enseñanza aprobada por el INPEC: i) Le corresponde a la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza calificar por escrito el desarrollo de la actividad adelantada por el interno ii) Realizada la evaluación, el Director del Establecimiento Penitenciario deberá emitir el respectivo certificado de cómputo para el trámite de redención el cual debe ser remitido al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigila la pena del interno y iii) Cumplido lo anterior, le atañe al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizar el estudio de cumplimiento de los requisitos legales, para la concesión de la redención de pena solicitada.”*

---

<sup>1</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia pdf04

<sup>2</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia pdf04, 17 y 24

<sup>3</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia pdf12 y 13

RADICADO 05088-31-05-001-2023-00020-00

Ahora, si bien el juez de primera instancia avocó conocimiento en contra del accionado COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA, envió la notificación a un correo electrónico que no corresponde a uno de los que normalmente usa la entidad. El correo usado fue [notificaciones@inpec.gov.co](mailto:notificaciones@inpec.gov.co)<sup>5</sup>, cuando de acuerdo a la página oficial del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, los correos de notificaciones son:

DIRECCIÓN: Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaléña Ibagué

TELÉFONO: (8) 2739500

DIRECTOR: CT. R MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LONDOÑO

SUBDIRECTOR ESTRUCTURA I - II: DRA. LILIAM PATRICIA RUBIO ESCALANTE

SUBDIRECTOR ESTRUCTURA III: DRA. MARTHA JUDITH PARRA BOLAÑOS

CORREO ELECTRÓNICO PRINCIPAL: [direccion.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:direccion.epcpicalena@inpec.gov.co)

CORREOS ELECTRÓNICOS DE DEPENDENCIAS:

[subdireccion.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:subdireccion.epcpicalena@inpec.gov.co)

[subdireccion3.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:subdireccion3.epcpicalena@inpec.gov.co)

[juridica.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:juridica.epcpicalena@inpec.gov.co)

[planeacion.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:planeacion.epcpicalena@inpec.gov.co)

[comando.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:comando.epcpicalena@inpec.gov.co)

[administrativa.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:administrativa.epcpicalena@inpec.gov.co)

[talentohumano.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:talentohumano.epcpicalena@inpec.gov.co)

[tratamiento.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:tratamiento.epcpicalena@inpec.gov.co)

[sistemas.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:sistemas.epcpicalena@inpec.gov.co)

[aciudadano.epcpicalena@inpec.gov.co](mailto:aciudadano.epcpicalena@inpec.gov.co)

COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA no presentó interviniente en la presente acción constitucional y así se dejó constancia en la sentencia que resolvió la primera instancia<sup>4</sup>.

No puede perderse de vista que el inciso segundo del **artículo 13 del Decreto 2591 de 1991** al regular lo atinente a las personas contra quién se dirige la acción y los intervinientes, señala lo siguiente:

**“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,**

<sup>4</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia pdf06

<sup>5</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia pdf06

<sup>6</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia pdf37

**RADICADO 05088-31-05-001-2023-00020-00**

la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”.

**(Negrilla intencional)**

En el mismo sentido, el Decreto 306 de 1992 en su artículo 5 dispone:

**“De la notificación de las providencias a las partes.** De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

**“El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa.”**

**(Negrilla intencional)**

A partir del contenido de las anteriores disposiciones, la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que aún a pesar de la informalidad inherente a este tipo de proceso constitucional en el que se busca privilegiar la celeridad en virtud de la necesidad de eficacia en la protección de los derechos fundamentales; en todo caso, su ejercicio se encuentra claramente cobijado por el principio constitucional del debido proceso, de manera que en su trámite se debe dar aplicación a todas las disposiciones constitucionales y legales con que cuenta el ordenamiento jurídico, no sólo para la adecuada realización de los derechos que la parte activa busca le sean protegidos, sino los de la parte accionada y los de quienes resulten afectados con las determinaciones que se adopten en su curso.

Se concluye entonces qué si se presentan actuaciones procesales que conlleven a la vulneración de los derechos fundamentales de debido proceso y de defensa, deben adoptarse las medidas dirigidas a su saneamiento para restablecer el equilibrio procesal y el derecho que ha sido de este modo conculcado.

Consecuente con lo anterior, y atendiendo a los hechos y pretensiones del escrito de tutela, la sentencia y la impugnación, es claro que en el presente proceso constitucional resulta imperioso NOTIFICAR correctamente a COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA.

**RADICADO 05088-31-05-001-2023-00020-00**

Así las cosas, al advertir que se ha configurado la nulidad consagrada en el artículo 133 del Código General del Proceso, numeral 8, en concordancia con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, que se impone declararla a partir de la sentencia proferida el **1 de febrero de 2023**, con el fin de que se disponga la notificación en forma correcta de COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA.

## **2. LA DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la Ley, **RESUELVE:**

Decretar la **NULIDAD** de todo lo actuado en la presente acción de tutela a partir de la sentencia proferida el **1 de febrero de 2023**, con el fin de que se disponga la notificación en forma correcta de COIBA –ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ PICALÉÑA.

**NOTIFÍQUESE** ésta decisión a las partes, por cualquier otro medio eficaz (Decreto 2591/91 Art. 16; Decreto 306/92 Art. 5).

**Los Magistrados,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

RADICADO 05088-31-05-001-2023-00020-00

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 042 del 10 de marzo de 2023.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>